

NOMENCLATURA□□: 1. [40]Sentencia□□
JUZGADO □□□: 5° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL□□□: C-2384-2021
CARATULADO□□: ROMÁN/FISCO DE CHILE / CONSEJO DE
DEFENSAL DEL ESTADO

Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 05 de marzo de 2021, a folio 1, comparece Mario Armando Cortez Muñoz, en representación de don Rubén Mario Román Duque, todos domiciliados para estos efectos en calle Carmen 602, departamento 2611, comuna de Santiago, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas N°1687, Comuna de Santiago, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que se expresan a continuación.

Incorpora el relato realizado directamente por don Rubén Mario Román Duque, en los siguientes términos: “Fui detenido el 30 de septiembre de 1973 en mi domicilio, por carabineros, fui torturado en mi casa, donde fui golpeado, estrangulado y ahogado con una bolsa plástica, que ponían en mi cabeza, mientras me pegaban palos en las rodillas y los muslos, me dieron una golpiza con golpes de puño, patadas, culatazos, me aplicaron corriente con unos bastones que daban descargas eléctricas me dieron golpes eléctricos en la cara, en la cabeza, en el pecho y las manos, me encapucharon y me amarraron las manos y los pies y fui trasladado a la comisaria, donde nuevamente fui sometido a brutales torturas consistentes en lo mismo, golpes y descargas eléctricas, pero que me sacaron los pantalones y me electrocutaron los testículos también.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Fui trasladado al estadio nacional, el recibimiento fue a punta de culatazos y patadas en un callejón oscuro hecho por militares con un golpe de culata que me dieron en la espalda caí al suelo, me dieron otro en la cabeza y perdí la conciencia, me encerraron en uno de los camarines con muchos detenidos, hacíamos turno para dormir debido a que no podíamos estar todos acostados, era sacado del camarín para ser torturado, me aplicaron nuevamente corriente, esta vez los militares, me desnudaron y me pusieron corriente en los testículos, en el pene, en el ano con algo que me introdujeron, siempre me resistí pero los golpes eran brutales, estaba amarrado de manos y pies y con venda en los ojos, era contenido por varios militares me garraaban para inmovilizarme, me electrocutaron los labios, estuve siete días preso en el estadio pero esto pareció una eternidad, me torturaron todos los días a diferentes horarios y la brutalidad de las torturas era mayor cada día, todavía no me explico como pude resistir tanto martirio. Salí en libertad el 7 de octubre”.

Señala que el demandante fue reconocido como víctima de violación a los derechos humanos por el propio Estado de Chile, encontrándose en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados elaborado por la Comisión Valech II.

Expone que la declaración de estado de guerra interna definió como enemigos a los partidarios del gobierno de la Unidad Popular y a los miembros de los partidos políticos de la izquierda chilena. Refiere que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron rápidamente el control del país, y que personeros del gobierno derrocado, dirigentes políticos, sociales y sindicales, profesores universitarios y otras personas de relevancia pública asociadas al gobierno depuesto fueron conminados a presentarse ante las nuevas autoridades. Relata que las escuelas, las universidades, las oficinas, las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWYYL

fábricas, los asentamientos de la reforma agraria y los hogares de miles de familias fueron allanados para buscar armas, y que miles de personas fueron arrestadas y recluidas en recintos deportivos, oficinas públicas, regimientos, barcos, recintos policiales y otros lugares que fueron habilitados como centros de detención.

Señala que las características de estas detenciones causaron un gran impacto en los afectados y en quienes presenciaron estas situaciones, y que el maltrato verbal a personas desarmadas fue un hecho generalizado. Expone que el despliegue desproporcionado de fuerza producía una profunda sensación de indefensión, vulnerabilidad, desamparo e incertidumbre por tales actos. Sostiene que el desconcierto y el temor se amplificaban al constatar que no había instancia alguna para reclamar por el atropello y la arbitrariedad, ni siquiera para obtener la restitución o el resarcimiento de los enseres, maquinarias e instrumentos de trabajo destruidos.

Manifiesta que el quiebre de la democracia no solamente afectó a quienes fueron detenidos y torturados por razones políticas, sino que afectó también a la integración social y a las posibilidades de trabajo y participación de amplios sectores. Expone que, con la proscripción de los partidos políticos de la Unidad Popular y la persecución a numerosas organizaciones sindicales y sociales, quienes formaban parte de ellas perdieron los referentes institucionales, sociales y, en muchos casos, los referentes ideológicos que habían orientado el sentido de sus vidas en el marco de experiencias colectivas. Agrega que, desintegradas o debilitadas sus redes de apoyo, se hizo inviable su inserción social y laboral con las condiciones anteriores y se frustraron sus expectativas de futuro. Sostiene que esto marcó, para la mayoría de quienes fueron detenidos en 1973, el colapso de sus proyectos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Afirma que, consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente por el país. Sostiene que, con el pasar de los años, muchos creyeron que, si bien los malos tratos habían sido comunes contra los prisioneros del régimen militar, la tortura propiamente tal no había sido tan masiva. Sin embargo, manifiesta que quienes habían sido torturados, las más de las veces también en el silencio, guardaban la memoria, las marcas y las consecuencias de "tratos crueles, inhumanos y degradantes", según la Declaración Universal de derechos humanos, que literalmente les habían cambiado o mutilado la vida.

Señala que al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 regía en Chile la Constitución de 1925. Expone que esta Carta Fundamental consagraba la división de poderes, cuya finalidad era evitar los abusos en el ejercicio de sus funciones, mediante la fiscalización recíproca de sus actuaciones y la común sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Manifiesta que, al producirse el derrocamiento del gobierno elegido en 1970, la Junta Militar procedió a fijar sus propias atribuciones y a subordinar el ejercicio de otros poderes del Estado a las necesidades del momento. Sostiene que la Junta Militar declaró que asumía el "Mando Supremo de la Nación", entendiendo por tal la concentración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, comprometiéndose en principio a garantizar la "plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial", así como a respetar la "Constitución y las leyes de la república, en la medida que la actual situación del país lo permita". Señala que la Junta Militar se declaraba investida de la misión de reparar los males atribuidos a la acción del marxismo, sindicada como contraria a los intereses nacionales, y definía la situación del momento como constitutiva de un estado de guerra interna librada contra sus agentes.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Relata que, a continuación del golpe militar, mediante distintos decretos leyes, se disolvieron el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional; se proscribió a los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular, a la vez que se decretaba el receso de todas las colectividades restantes (si bien en 1977, producto de la creciente oposición del Partido Demócrata Cristiano al régimen militar, también serían prohibidas); y se destruyeron los registros electorales. Expone que, en consonancia con las anteriores medidas orientadas a desarticular las instituciones y los procedimientos requeridos por una democracia representativa, se cesó en su cargo a las autoridades municipales vigentes, a fin de designar alcaldes llamados a secundar el trabajo de la Junta; y se decretó la calidad interina de todos los funcionarios de la Administración Pública, a excepción de los miembros del Poder Judicial y de la Contraloría. Manifiesta que, en consecuencia, se contó con la capacidad para purgar a voluntad los servicios estatales. Señala que, en ausencia de elecciones y de plazos fijos para el ejercicio de funciones públicas de antigua representación popular, la ciudadanía perdió la facultad de elección de sus dirigentes mediante el sufragio. Expone que la Junta Militar también sometió a control las actividades de las organizaciones sindicales e intervino las universidades públicas y privadas, nombrando a altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro, como rectores-delegados dotados con amplias atribuciones para expulsar de sus planteles a profesores y estudiantes con simpatías de izquierda, a la vez que se sometían a escrutinio los contenidos de la docencia y la programación de los canales universitarios de televisión. Indica que se instauró una rigurosa censura a la prensa escrita, la radio y la televisión, que puso fin a cualquier medio de comunicación masiva capaz de cuestionar o fiscalizar las acciones del régimen militar, con lo cual se implantaron condiciones proclives a los abusos de poder, sea en la forma de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

prisión política o la tortura. Sostiene que, simultáneamente, el toque de queda, vigente durante años, sustrajo del escrutinio público las acciones de los agentes del Estado ocupados de la represión, autorizados para circular libremente en las horas prohibidas. Expone que el exilio por motivos de orden político entró en acción inmediatamente, afectando a miles de personas, muchas de las cuales, antes de hacer abandono del país, sufrieron prisión política y tortura.

Señala que todo esto permite concluir que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el cual, para su diseño y ejecución, movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas.

Asevera que la vida de don Rubén Mario Román Duque fue violentamente interrumpida, de tal forma que cambió para siempre, interrupción que se caracteriza por hechos tremendamente inhumanos, abusivos y violentos, que lo transformaron en una víctima, en un sobreviviente de los agentes del Estado al servicio de la dictadura cívico-militar chilena. Sostiene que lo más grave es que dicho cambio evidentemente no fue voluntario, ya que se debe a la interrupción que hace el Estado de Chile en su vida a través de los agentes que financió para tal efecto. Señala que en este caso se trata de crímenes de lesa humanidad.

Expone que queda de manifiesto que el actuar de los agentes del Estado de Chile transgredió los límites, irrespetando los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Sostiene que un Estado que se diga democrático debe, por ser tal, indemnizar a todo ciudadano que haya sido sometido a los vejámenes físicos y morales que, con ocasión de detenciones ilegales, torturas, prisión política,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

persecución, y ejecuciones hayan provocado sus agentes, ya que denegar la reparación del daño moral que subsistirá en las víctimas y sus familiares es obligarlos a seguir soportando el injusto permanentemente.

En consideración de los hechos descritos, el demandante interpone la presente demanda de Indemnización de Perjuicios, con la finalidad de que se indemnice al actor por los graves daños que ha sufrido producto de los diversos abusos de los que fue víctima, que hasta el día de hoy se traducen en dolor, sufrimiento, impotencia, miedo y amargura.

Sobre el derecho, el demandante sostiene que la responsabilidad del Estado en el país emana de los perjuicios provocados y causados por los órganos de la administración, lo que se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado de 1980, así como en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Expone que el reconocimiento y la aplicación efectiva de un principio general de responsabilidad patrimonial del Estado constituyen una de las piezas fundamentales dentro del sistema de relaciones jurídicas existentes entre la Administración y los ciudadanos. Refiere que hoy se admite sin disputa que para sujetar al poder público al imperio de la ley no basta con los controles judiciales de legalidad de los actos administrativos, ni tampoco con los controles extrajudiciales de naturaleza política o social. Señala que es preciso, además, que la Administración indemnice o repare los daños que sus actividades causen a los particulares.

Manifiesta que la Administración Pública, bajo cualquier forma de personificación, no es un sujeto jurídico cualquiera, al ser una institución reconocida en la Constitución, compuesta por privilegios y limitaciones, que se le imponen para garantizar que no se desvíe de ese fin y para que, cuando actúe, respete los derechos y libertades de los ciudadanos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Indica que quien pretende una reparación por los perjuicios que le ha causado otra persona, necesita fundamentar su pretensión en una razón suficiente que lo legitime para ello.

Señala que cuando ocurre una desgracia, una calamidad o un accidente que resulta en daños para las personas o bienes, hay que decidir si el afectado no tiene otra posibilidad más que la resignación o si puede esperar algo de los demás y, mejor aún, si tiene derecho a ello. Sostiene que, si la respuesta a la interrogante abierta fuera la última, tendríamos que movernos todavía entre las dos alternativas: o se acude a un sistema de auxilios o de ayudas, lo que a su vez oscila entre la beneficencia y la seguridad social; o se establece un derecho subjetivo del perjudicado a reclamar de otro el precio en que se valore el daño. Solo en este último caso puede hablarse, en rigor, de indemnización, de derecho a la indemnización, y por consiguiente de responsabilidad.

Expone que existe un consenso entre los civilistas en que la función primordial de la responsabilidad patrimonial es y debe ser la reparatoria o compensatoria: la responsabilidad se concibe como la reparación de los daños producidos a las víctimas, siendo esta la función básica de la responsabilidad. Refiere que la reparación de los daños parece ser la razón de ser de esta institución, de modo que un sistema de responsabilidad que no repara los daños a las víctimas no puede considerarse responsabilidad en el sentido estricto, ya que se exige siempre la comisión de un daño que, por regla general, debe ser compensado en dinero. La función compensatoria supone la intervención del derecho una vez que se ha producido el hecho dañoso, renunciando a cualquier consideración de intervención previa que pudiera minimizar la ocurrencia de actos dañosos.

Sostiene que no existe duda de que la función primordial de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en tanto responsabilidad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

civil, es la reparación de los daños que pueda producir la actuación u omisión administrativa. Así lo entiende pacíficamente la doctrina, ya que lo que persigue la responsabilidad es la integridad patrimonial de los particulares, construyendo una verdadera garantía. Manifiesta que no es posible concebir una responsabilidad extracontractual del Estado que no tenga como objetivo prioritario la compensación de daños y la indemnización de las víctimas.

Expone que para que surja el deber de indemnizar es preciso que se produzca una insuficiencia de la prestación efectivamente realizada frente al nivel ideal de la misma que resulta exigible, en función del análisis circunstancial del caso.

Manifiesta que la responsabilidad extracontractual del Estado se traduce en la búsqueda de soluciones tendientes a otorgar a los ciudadanos una adecuada protección legal frente a los daños sufridos en su persona o propiedad, derivados de la actividad jurídica y material de la administración y del Estado en general.

Cita los artículos 6, 7, y el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República,

Refiere a la ley orgánica constitucional dictada en virtud de lo señalado en el Artículo 38, correspondiente a la Ley N.º 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y cita su artículo 1, inciso segundo, y lo establecido por su artículo 2 y 3.

Refiere que, en cuanto a los principios que debe observar el Estado, se establece en el Artículo 3º, inciso segundo, de la Ley N.º 18.575 que la Administración del Estado debe observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulso de oficio del procedimiento y control.



El actor expone que, sobre la responsabilidad del Estado, la Ley N°18.575 establece imperativamente en su artículo 4 que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado. Menciona que el artículo 44 de la ley orgánica citada preceptúa que los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio, aunque el Estado tendrá derecho a repetir contra el funcionario que hubiera incurrido en la falta personal.

Sostiene que esta norma establece en el país una responsabilidad directa del Estado por el daño causado por los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sea que el daño se produzca en un funcionamiento normal o anormal, regular o no, jurídico o de hecho, ya que el legislador no distingue. Así lo ha venido sosteniendo desde el año 1986, como en el caso “Vásquez con Fisco”.

Señala que la responsabilidad directa del Estado o Teoría del Órgano se confirma a nivel normativo mediante el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que confirma a nivel normativo dicha responsabilidad.

Argumenta que el fundamento básico de la responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango supraconstitucional, constitucional y legal, todas normas del ámbito del derecho público.

Refiere a jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que estableció que la responsabilidad del Estado por actos de la administración emana de la naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones que debe



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWYYL

desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que pueden causar esas acciones se sometan a normas y principios de la rama del derecho público. Añade lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en el caso Ortega con Fisco.

Afirma que la responsabilidad del Estado en el presente caso es de derecho público, siendo totalmente ajeno el estatuto del derecho común a los ilícitos contra los derechos fundamentales.

Desarrolla, además, la forma en que se ha desarrollado la responsabilidad del Estado en la doctrina.

El actor sostiene, basándose en la doctrina citada, que la responsabilidad del Estado es el efecto jurídico que la Constitución atribuye a los actos, hechos, conductas y omisiones contrarios a Derecho, producidos por un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones, cualesquiera que sean estas, y que ocasionen daño a una víctima que no está jurídicamente obligada a soportar. Expone que esta responsabilidad presenta características muy específicas.

El actor manifiesta que, entre las características de la responsabilidad del Estado, se encuentran las siguientes:

1. Es de carácter constitucional y no se trata de la responsabilidad civil como la que se origina entre sujetos privados. Señala que se trata de una responsabilidad constitucional, corolario de la supremacía constitucional (artículos 6° inciso tercero y 7° inciso tercero), que no tiende al castigo de un culpable, sino a que el ejercicio de la función estatal respete la Constitución en su integridad y plenitud. Expone que, por tanto, se busca resarcir, compensar o



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

restituir al tercero o víctima por el daño cometido por el Estado en su actividad.

2. Está constitucionalmente prevista y consagrada de modo genérico para todos los órganos del Estado (artículos 6° y 7°) y de modo específico para todos sus órganos administrativos.

El actor sostiene que, en relación con el hecho ilícito de autos como crimen de lesa humanidad, se define este concepto en el primer proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, señalando “los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia”.

Fundamenta que, con el avance del derecho internacional, se reconoce la vinculación del jus cogens con los delitos de naturaleza de lesa humanidad. Señala que fue la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de mayo de 1969, la que incorporó definitivamente en el derecho internacional el concepto de un derecho imperativo o derecho obligatorio, denominado jus cogens.

Cita los artículos 53 y 64 de dicho Convenio, y refiere que el vínculo entre este derecho imperativo o derecho obligatorio con los crímenes de lesa humanidad fue constatado simultáneamente a través de la jurisprudencia internacional, la cual cita.

El actor manifiesta que, en el ámbito nacional, existe regulación vigente para entender cuándo se está frente a un delito de lesa humanidad. Expone que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Congreso Nacional y cuyo Instrumento de Ratificación se depositó el 29 de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

junio de 2009 ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, y que entró en vigencia en Chile el 1 de septiembre del año 2009, señalando en su artículo 7° los crímenes de lesa humanidad, a lo que se suma la ley 20.357, que lo establece en su Título I “Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio”.

Asevera que, en el caso de marras, se está frente a un ilícito que constituye un delito de lesa humanidad, por lo cual el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados, evadiendo la normativa humanitaria internacional de naturaleza jus cogens.

Sobre la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida, señala que, según los hechos acontecidos y descritos por la víctima, y la legislación, doctrina y jurisprudencia expuestas en su libelo, el intentar aplicar el derecho común a este tipo de casos resultaría en un incumplimiento grave por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de derechos humanos, así como a su condición de Estado perteneciente a la comunidad internacional, y a los principios generales del Derecho Internacional de los derechos humanos. Expone que estos principios están amparados por los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan a la Nación a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, conforme a lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Carta Política.

Indica que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos estatuyen que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas bajo el pretexto de hacer primar otros aspectos de derecho interno. Señala que, si se comete un hecho punible imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

inobservancia de un canon internacional, con el subsecuente deber de reparación y de hacer cesar los efectos del agravio.

Expone que, en relación con lo anterior, así ha quedado demostrado en diversos fallos judiciales, los cuales cita y sostiene evidencian la tendencia de rechazar la excepción de prescripción en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad, argumentando que estos delitos, por su naturaleza, no pueden estar sujetos a prescripción alguna.

Refiere a la normativa aplicable a la especie, tales como la Declaración Universal de derechos humanos, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de Ginebra de 1949, Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, Reglamento de la Haya de 1907, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de derechos humanos, Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, Resolución N°60/147 de fecha 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Pacto de San José de Costa Rica, Constitución Política de la Republica y ley 20.357, entre otras, es de derecho público, constituyendo normativa internacional humanitaria de carácter jus cogen. Afirma que el Estado de Chile no puede pretender eludir su responsabilidad en el presente caso, atendido principalmente el artículo 5° de la Constitución Política de la República, un límite a la soberanía y al derecho interno lo constituyen justamente los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

tornándose inadecuada la aplicación del Código Civil chileno en cuanto a acoger las disposiciones que hacen viable la prescripción, código que por cierto entro en vigencia en 1857, por lo que sin duda es insuficiente para resolver casos de violencia internacionales, y vulneraciones masivas y sistemáticas a derechos esenciales de un sector de habitantes del Estado.

Manifiesta que, ante la insistencia por parte del Consejo de Defensa del Estado de Chile de promover ante los tribunales de justicia el instituto jurídico de la prescripción, y el haber sido acogido tal razonamiento por parte de los tribunales de justicia, las víctimas de violaciones a los derechos humanos se vieron en la necesidad de recurrir ante la Corte Interamericana de derechos humanos. Expone que, en este sentido, el 17 de mayo de 2017, la Comisión Interamericana de derechos humanos sometió el caso de María Laura Órdenes Guerra y otros respecto de la República de Chile a la jurisdicción de la Corte Interamericana de derechos humanos, la cual, en sus puntos resolutivos de fecha 29 de noviembre del año 2018, determinó que el Estado de Chile resultó ser culpable de ilícitos de carácter internacional debido a la aplicación de prescripción en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, refiere que el Estado de Chile, producto de algunos de sus tribunales de justicia, al acoger la excepción de prescripción promovida por el Consejo de Defensa del Estado de Chile, resulto ser culpable de ilícitos de carácter internacional, así también la Comisión Interamericana de derechos humanos, realiza las respectivas recomendaciones al Estado de Chile, a las cuales el Estado chileno dio respuestas, todas en favor de no acoger la prescripción y asegurar la no repetición en el sentido de volver a acoger la prescripción en este tipo de causas.

Afirma que la mayoría de la jurisprudencia considera que el daño moral se fundamenta en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se sostiene que el término "dolor" se entiende en un sentido amplio, incluyendo el miedo, la emoción, la vergüenza y la pena física o moral ocasionada por el hecho dañoso.

En cuanto a la prueba del daño moral, expresa que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en que no requiere prueba directa. Señala que basta con que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño, ya que, argumenta, según la jurisprudencia se produce una alteración en la carga de la prueba, trasladando al demandado la obligación de demostrar que la víctima no sufrió efectivamente el daño alegado.

En relación con el deber de responder por los daños causados por la vulneración de los derechos fundamentales, expone que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1, establece que cuando se ha violado un derecho o libertad protegidos por dicha Convención, se debe garantizar al lesionado el goce de sus derechos o libertades conculcados. Además, se señala que, cuando sea procedente, se deben reparar las consecuencias de la vulneración y pagar una justa indemnización a la parte lesionada.

Refiere que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. En este contexto, se afirma que dicha disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de un Estado.

Finalmente, expone que Don Rubén Mario Román Duque fue víctima de detención ilegal y arbitraria, torturas crueles, apremios físicos y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

psicológicos inhumanos, y persecución y prisión política, todo a manos de agentes del Estado, lo que, afirma, le causó un daño significativo en su vida emocional, personal y laboral, y que, a pesar de los esfuerzos por llevar una vida normal, continúa sufriendo y siendo atormentado por los eventos vividos.

En consecuencia, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile y acogerla a tramitación, condenando al demandado a pagar al demandante la suma de \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos), más intereses, reajustes legales y con costas; o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero, que este tribunal estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Con fecha 31 de mayo de 2022, a folio 20, comparece Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en autos, solicitando el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

Como primera defensa, opone la excepción de reparación integral, e improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Sostiene que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los derechos humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional, y que dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior y desde el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”, ya que sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Afirma que el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional, y que argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Argumenta que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Refiere que, en este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Menciona que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Expone que en las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Señala que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Indica que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Expone que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, y que, por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas". Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Señala que, de esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación "moral y patrimonial" buscada por el proyecto. La noción de reparación "por el dolor" de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal "de indemnización" y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la "responsabilidad extracontractual" del Estado.

Añade que esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover "la reparación del *daño moral* de las víctimas" a que se refiere el artículo 18.

Afirma que, asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

En ese orden de ideas, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Señala que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Manifiesta que, respecto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones, por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Sobre este punto, reitera que a diciembre de 2019 el Estado de Chile ha desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Observa que, siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

no obsta a que pueda ser valorizada para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Indica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar

Refiere que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Señala que, respecto a las reparaciones específicas, en lo tocante al presente caso, el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N°19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Refiere que la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Añade que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-, y que el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Señala que, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza solo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios, la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Menciona que, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad, cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Señala que, a nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883. Este presupuesto se distribuye por cada Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

que requieren beneficiarios en el extrasistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992. Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los derechos humanos.

Señala que, se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura. Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas. Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Menciona que, respecto a las reparaciones simbólicas, al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de derechos humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, siempre discutible en sus



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

virtudes compensatorias, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Cita doctrina en relación a lo expuesto, y enumera reparaciones simbólicas efectuadas en este contexto.

Sobre la identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, señala que, de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.

Destaca que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, y que, de esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

Cita al respecto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, que afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123, ratificado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013.

Indica que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

pensiones, beneficios y prestaciones públicas, tal como en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Refiere que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. En un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Manifiesta que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilite la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones, lo que, sostiene, puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos, o incluso este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluye que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

En subsidio, opone excepción de prescripción extintiva, de la acción deducida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Conforme al relato efectuado por la demandante, la prisión política y torturas ocurrieron a entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre de 1973.

Argumenta que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 9 de mayo de 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil, por lo que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Presenta generalidades sobre la prescripción, destacando que es una institución universal y de orden público. Se argumenta que la prescripción es una herramienta estabilizadora e indispensable en el orden social, que busca dar fijeza y certidumbre a los derechos emanados de las relaciones sociales.

Hace presente que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Expresa que la prescripción no es una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Agrega que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Afirma que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Añade que, en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Complementa citando jurisprudencia sobre prescripción, que señala:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Sobre el contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, señala que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Menciona que de allí no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Expresa que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, y que, por lo tanto, no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece, como se ha dicho, al ámbito patrimonial.

Sostiene que, en efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los derechos humanos. Asevera, por lo tanto, no existe fundamento plausible para estimar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente, manifiesta que aun cuando la demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, afirma la demandada que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Refiere que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, en su artículo 1º letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Señala que los Convenios de Ginebra de 1949 y la Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad” regulan la prescripción en el mismo sentido.

Sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

Manifiesta que en relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2º del artículo 5º de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de derechos humanos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

como de la Corte Interamericana de derechos humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Sostiene que, por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de derechos humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile.

Manifiesta que, es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

En efecto, la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, y “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, deben aplicarse las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

del Estado, motivo por el cual se deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo.

Refiere que los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Sostiene que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Asevera que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Señala que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Manifiesta que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. Sostiene que en tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia, según lo resuelto por la jurisprudencia de tribunales superiores.

En subsidio de las excepciones invocadas, alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos se debe considerar todos los pagos recibidos por los actores a través de los años de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Menciona que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Manifiesta que también es pertinente hacer presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Afirma, además, que es improcedente el pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Declara que a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Declara que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, sostiene que no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Señala que, respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Manifiesta que, por consiguiente, el hipotético caso de que se acoja la acción y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y la parte demandada incurra en mora.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Con fecha 10 de junio de 2022, a folio 24, la demandante evacúa el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

Realiza una exposición sobre el contexto relativo al daño que sufren las víctimas de violencia política, refiriendo parte del trabajo denominado “Trauma político y la transmisión transgeneracional del daño”.

En cuanto a la contestación de la defensa fiscal, respecto de la excepción de reparación integral, y la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizada la demandante, indica que dicho planteamiento lo expone debido a que considera que su representada ya fue indemnizada, presentando cifras exorbitantes que no tienen relación con la situación particular de la demandante, presentando una rendición de cuentas que refleja gastos universales del Estado, montos que responden a medidas administrativas de carácter asistencial, que no dicen relación con la reparación solicitada por la vía judicial. Afirma que en toda la exposición que realiza el Fisco en su excepción no se encuentra norma alguna que haga lugar a la incompatibilidad con la indemnización que es solicitada en la demanda, sólo se basa en una suposición de que esta normativa de carácter asistencial y administrativa fue dictada para reparar el daño moral sufrido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, normativa que es asumida voluntariamente por el Estado y que no significa en ninguna caso la renuncia de la víctima a ejercer la presente acción judicial.

Plantea su preocupación de que el propio Estado que es el responsable por las vulneraciones descritas en la demanda, concorra pretendiendo fijar la cuantía y los mecanismos de la indemnización que debe pagar, tratando de omitir el pronunciamiento de los Tribunales de Justicia. Se remite a la sentencia definitiva dictada por el Décimo Quinto Juzgado de Letras en lo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Civil de Santiago, en causa Rol N°C-5834-2014 caratulada Pinto con Fisco de Chile, confirmada por sentencia de reemplazo de la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol 796-2016.

Señala que no se puede olvidar que se está ante hechos que se desarrollaron en el contexto de la dictadura, fue el Estado chileno quien financió y amparó a agentes para violar derechos humanos, tratándose de crímenes de lesa humanidad.

Cita los artículos 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República, y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Explica que las normas internas invocadas por el Fisco están siendo presentadas de manera contradictoria con las normas y principios del Derecho Internacional, por lo que la normativa citada pondría a nuestra legislación en una postura sin sentido, ya que no estaría respondiendo al orden armónico, lógico y coherente que debe tener, que por cierto integra las normas del Derecho Internacional a través de norma expresa, como lo es el artículo 5°, inciso segundo de la Constitución Política de la República.

Cita el artículo 24 inciso primero de la Ley N°19.123, y afirma que esto demuestra la armonía entre la normativa interna y la internacional, quedando de manifiesto que la postura del Fisco de Chile, no se es viable.

Manifiesta que la normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación. Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Respecto a la excepción promovida por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco, consistente en la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante, cita lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile, que se suma a lo reconocido por la Excma. Corte Suprema respecto del carácter complementario que tienen las reparaciones económicas otorgadas mediante las leyes promulgadas desde la recuperación de la democracia en 1990 con las indemnizaciones obtenidas por la vía judicial, indicando que el otorgamiento de pensiones de la Ley N°19.123 no impide a las víctimas obtener indemnizaciones por la vía de la demanda indemnizatoria de daño moral, desestimando razonamientos que consideraban la reparación administrativa como excluyente de la reparación judicial.

Expresa que la Corte considera que el criterio jurisprudencial prevaleciente actualmente a nivel interno, acerca del carácter complementario y no excluyente de reparaciones otorgadas en vías administrativa y judicial, es razonable en relación con el derecho de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia para solicitar una declaratoria judicial de responsabilidad estatal, ya sea para que se efectúe una determinación individual de daños o, en su caso, para cuestionar la suficiencia o efectividad de reparaciones recibidas con anterioridad.

Concluye que la jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia chilena ha variado notablemente hacia una interpretación razonable y adecuada con su deber de ejercer un efectivo control de convencionalidad. La Corte Interamericana valora positivamente tal cambio jurisprudencial

Advierte que el Estado de Chile ha reconocido el carácter no excluyente de las medidas administrativas, confirmando el razonamiento de la Comisión en los términos de que “las vías de reparación administrativa y judicial son



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

complementarias y no excluyentes.”, incluso el propio Estado exhibió jurisprudencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional, con la finalidad de confirmar el razonamiento de la Comisión.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, señala que se sostuvo en ocasiones que al no existir norma especial que determine el plazo de prescripción en acciones de indemnización de perjuicios por daño moral, irrogado por crímenes cometidos por agentes del Estado, se debe recurrir al derecho común, que estaría representado por la regulación del Código Civil; dicha interpretación no resultaría correcta, y aplicar el derecho común, remitiéndose a cualquiera de sus normas destinadas a buscar la prescripción, resultaría un incumplimiento por parte del Estado a los Tratados Internacionales de derechos humanos.

Expone que la acción que se interpone contra el Fisco busca obtener la reparación de los perjuicios que fueron ocasionados por agentes del Estado, lo que resulta totalmente coherente conforme se desprende de la Constitución, en concordancia con los principios generales del Derecho Internacional de los derechos humanos y el artículo 5° y 6° de la Constitución, lo que obliga al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra.

Manifiesta que a lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en convenios y tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

Expone una serie de fallos recientes, donde se indica la inaplicabilidad del derecho común a casos como la acción deducida en la especie.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Reiterar al respecto, que la normativa aplicable a la especie, tales como Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de Ginebra de 1949, Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, Reglamento de la Haya de 1907, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, Resolución N°60/147 de fecha 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Pacto de San José de Costa Rica, Constitución Política de la Republica y ley 20.357, entre otras, es de derecho público, constituyendo normativa internacional humanitaria de carácter jus cogen. En consecuencia, el Estado de Chile no puede pretender eludir su responsabilidad en el presente caso, dado que, atendido principalmente el artículo 5 de la Constitución Política de la República, un límite a la soberanía y por tanto al derecho interno lo constituye justamente los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, tornándose inadecuada la aplicación del Código Civil chileno, que entró en vigencia en 1857, para resolver casos de violencia internacionales, masivas y sistemáticas a derechos esenciales de un sector de habitantes del Estado.

Manifiesta que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrantes del ordenamiento jurídico internacional por disposición del inciso segundo del Artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

Señala que ante la conducta insistente por parte del Consejo de Defensa del Estado de Chile, de promover ante los tribunales de justicia el instituto jurídico de la prescripción, y el haber sido acogido tal razonamiento por parte de algunos tribunales de justicia, aplicando la prescripción, víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, se vieron en la necesidad de concurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que nuevamente el Estado de Chile, pero por intermedio de algunos de sus Tribunales de justicia, volvían a vulnerar sus Derechos, es así que el 17 de Mayo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso María Laura Órdenes Guerra y otros respecto de la República de Chile, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus puntos resolutivos de fecha 29 de Noviembre del año 2018, producto de la aplicación de prescripción por parte de algunos tribunales de justicia, en causas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos, decide por unanimidad que “El Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma”.

Es decir, que el Estado de Chile, producto de algunos de sus tribunales de justicia, al acoger la excepción de prescripción promovida por el Consejo de Defensa del Estado de Chile, resulto ser culpable de ilícitos de carácter internacional, así también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realiza las respectivas recomendaciones al Estado de Chile, a las cuales el Estado chileno dio respuestas, todas en favor de no acoger la prescripción y asegurar la no repetición en el sentido de volver a acoger la prescripción en este tipo de causas.

En lo que respecta al monto de la indemnización y los reajustes e intereses, en relación al monto solicitado, indica que este es de plena justicia, toda vez que su representado fue víctima de crímenes de lesa humanidad, siendo sometido a tortura, persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo dañado en sus aspectos más básicos y trascendentes, todo esto le genero un gran daño en su vida emocional y personal.

Lo anterior sin perjuicio de que el pronunciamiento final corresponde al tribunal en una correcta apreciación, así como la procedencia de los reajustes e intereses. Cita jurisprudencia.

Sostiene que el hecho de autos es crimen de lesa humanidad, y que, en una insistencia evidente, se trata de dar un tratamiento común y simple a la acción deducida en la demanda, con una notoria intención de olvidar que se está en presencia de crímenes de lesa humanidad.

Refiere que el término crimen de lesa humanidad fue utilizado como término no técnico desde 1915 y en declaraciones posteriores a la primera guerra mundial, como lo anota una de las sentencias del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, pero como concepto independiente lo fue



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Núremberg, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a la insuficiencia de la categoría Crimen de Guerra que sólo podía aplicarse a actos que afectaran a combatientes enemigos, excluyendo a los crímenes cuyas víctimas eran el mismo país o de estados aliados o apátridas. La noción encuentra su autonomía definitiva en el Primer Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad en 1954.

Con el avance del derecho internacional, se reconoce la vinculación del jus cogens con los delitos de naturaleza de lesa humanidad. Expresa que el reconocimiento por el derecho internacional de un derecho obligatorio sólo fue posible en la segunda mitad del siglo XX. En un informe dirigido a la Comisión de Derecho Internacional, en 1953, se admite la existencia de un “orden público de la comunidad internacional” constituidos por ciertos principios absolutos del derecho internacional que permiten determinar la licitud o ilicitud de un tratado.

Señala que la Corte Internacional de Justicia, en febrero de 1970, en una trascendental sentencia, con ocasión del caso Barcelona Traction light & Power Co., reconoció la existencia para los Estados de obligaciones erga omnes en relación con derechos fundamentales.

En la misma oportunidad, el Tribunal estimó que algunas obligaciones internacionales son tan básicas que afectan por igual a todos los Estados y todos ellos tienen el derecho y la obligación de ayudar a proteger su cumplimiento. La violación por un Estado de una obligación erga omnes – estableció- lesiona a todos los demás, incluso a aquellos que no se ven directamente o especialmente afectado por la conducta. Entre los ejemplos dados por la Corte de obligaciones oponibles a todo el género humano se citó



la ilegalidad de la agresión, del genocidio, de la esclavitud y de la discriminación racial.

En cuanto al daño moral por vulneración a los derechos fundamentales, destaca que ha de entenderse como la lesión inmaterial o agravio inferido por un sujeto al derecho subjetivo inherente a la persona de otro sujeto. Importan daño moral indemnizable los dolores, sufrimientos, preocupaciones y molestias inferidos a la víctima. Este daño consiste en los dolores físicos y angustias experimentados por la víctima. Cita jurisprudencia.

Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba. Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño, así por ejemplo la calidad de hijo de la víctima que fallece en un accidente.

Con respecto al deber de responder por los daños irrogados por vulneración de los derechos fundamentales, refiere el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, sostiene la profesora Szczeranski, que “la responsabilidad extracontractual del Estado se traduce en la búsqueda de soluciones tendientes a otorgar a los ciudadanos una adecuada protección legal, frente a los daños sufridos en su persona o propiedad, derivados de la actividad jurídica y material de la administración y del Estado en general”.

Sobre las características de la responsabilidad del Estado, sostiene el abogado don Raúl Letelier “que la persona jurídica responde por sus propios hechos, distinta a la responsabilidad indirecta o por hecho ajeno. La responsabilidad es de la persona jurídica, y no se trata de una responsabilidad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

por hechos de terceros, como sería la que deriva del accionar dañoso de los empleados o dependientes”.

No existe en el estatuto de responsabilidad estatal, un sistema de responsabilidad indirecta, como la responsabilidad vicaria o por el hecho ajeno. La responsabilidad del Estado es siempre directa.

Precisa los alcances de esta norma, citando doctrina, donde García de Enterría sostiene: “Está claro también y no es objeto de discusión alguna que la responsabilidad patrimonial de la Administración puede surgir de una actividad jurídica, ya se plasme en un acto administrativo o en un reglamento, como de una actividad puramente material o técnica o, incluso, de una omisión”.

Sostiene que la responsabilidad del Estado es de Derecho Público, así queda de manifiesto en el caso “Albornoz con Ortiz y Fisco”. Cita, asimismo, los casos “Caro con Fisco” y “Ortega con Fisco”.

Recalca que es claro que la responsabilidad del Estado en el presente caso es de derecho público, siendo totalmente ajeno el estatuto del derecho común a los ilícitos contra los derechos fundamentales. Cita doctrina.

Con fecha 22 de junio de 2022, a folio 26, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda, que da por reproducidas, y con su mérito pide el rechazo de la acción en todas sus partes.

En relación con la excepción de reparación satisfactiva opuesta, reitera lo señalado, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, con énfasis en el marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, a las reparaciones percibidas por los demandantes, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

En relación con la prescripción de las acciones deducidas en este juicio, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”, que concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Asevera que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. La aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Agrega que la Excelentísima Corte Suprema ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Tribunal en Pleno, queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre derechos humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia, y transcribe jurisprudencia en este sentido.

Con fecha 05 de agosto de 2022, a folio 27, se recibió la causa a prueba rindiéndose la que consta en autos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Con fecha 07 de octubre de 2024, a folio 58, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece Mario Armando Cortez Muñoz, en representación de don Rubén Mario Román Duque, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile, solicitando se le condene al pago de la suma de \$300.000.000.-, más intereses, reajustes legales y costas; o, en subsidio, lo que este tribunal estime de justicia y equidad, debidamente reajustado, con intereses y costas.

SEGUNDO: Que, a folio 20, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda solicitando su rechazo, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

TERCERO: Que la parte demandante, a fin de acreditar los hechos en que funda su acción, acompañó al proceso los siguientes documentos, en forma legal y no objetados:

A folio 33:

1.- Copia extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la Atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, Capítulo II, Título II “Acerca de la población afectada”.

2.- Copia de presentación titulada “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los derechos humanos” realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, Coordinador Equipo Especializado PRAIS, de 16 de octubre de 2017.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

3.- Copia de “informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, cometidas durante la dictadura militar”, elaborado por PRAIS y suscrito por doña Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS con fecha 23 de septiembre de 2016.

4.- Copia de columna de opinión “Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador”, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS de la Araucanía Norte, don Sergio Beltran P.

5.- Copia de informe “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico”, realizado por la Vicaria de la Solidaridad en julio de 1978.

6.- Copia de documento titulado “Algunos factores de daño a la salud mental”, Vicaría de la Solidaridad.

7.- Copia de informe “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos, realizado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad, de abril de 1987.

8.- Copia de documento titulado “Salud Mental y Violaciones a los derechos humanos”, realizado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, integrado por los doctores Andrés Donoso, Guillermo Hernández, Ramiro Olivares, el psicólogo Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería Janet Ulloa, de fecha julio de 1989.

9.- Copia de documento titulado “Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas”, de la Vicaría de la Solidaridad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

10.- Copia de documento “Consecuencias Psicosociales de la Represión Política”, realizado por Elizabeth Lira.

11.- Copia del capítulo III del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: “Contexto”.

12.- Copia del capítulo V del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: “Métodos de tortura: definiciones y testimonios”.

13.- Copia del capítulo VIII del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: “Consecuencias de la prisión política y la tortura”.

14.- Copia de documento denominado “La Tortura: Modelo de Intervención”, realizados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), año 2005.

15.- Copia de Informe denominado: -Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Realizado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latino Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

16- Sentencia de fecha 29 de noviembre del 2018, correspondiente al CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

17.- Extracto de la nómina de personas calificadas como víctimas de Prisión Política, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

A folio 42:

18.- Decreto N°1.040 de 26 de septiembre de 2003, que crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile.

19.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

CUARTO: Que, por su parte, la demandada acompañó la siguiente prueba documental, en forma legal y no objetada:

A folio 44:

1.- Ord. DSGT N°4792-7367, MAT “informa beneficios de reparación de personas que indica. Causas varias” de fecha 08 de junio de 2022, del Instituto de Previsión Social (IPS).

QUINTO: Que, al no encontrarse controvertido por el demandado la calidad de víctima de prisión política y tortura del demandante ni la participación de los agentes del Estado en tales hechos se tiene como hecho de la causa que el actor fue víctima de prisión política y tortura por parte de agentes del Estado de Chile, figurando en el N°7667 de la nómina de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, siendo, en consecuencia, víctima de la violación de sus derechos humanos.

SEXTO: Que, estando acreditadas las circunstancias señaladas en el considerando anterior, corresponde dilucidar y resolver las alegaciones sostenidas por el Consejo de Defensa del Estado en su contestación.

SÉPTIMO: Que la demandada opuso en primer término la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor.

OCTAVO: Que al respecto cabe señalar que el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos durante el régimen militar, a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Que, al respecto, la ley 19.992 y sus modificaciones, correspondiente a las asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la Comisión Valech a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, situación en la que se encuentra la demandante, y las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

reparaciones simbólicas a que alude el demandado, constituyen más bien un beneficio de carácter social tendiente a cumplir, además, con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, mas no una indemnización de daño material y/o moral sufridos por las víctimas de violación a los derechos humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata, lo cual lleva a desestimar las alegaciones deducida por la parte demandada.

NOVENO: Que, seguidamente, cabe hacerse cargo de la excepción de prescripción extintiva civil opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO: Que, en este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución N°2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, en vigor desde el año 1970, aprobó la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad”, la que dispuso:

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuren entre los delitos de derecho internacional más grave.

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales.

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal.

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1º: Son imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra, según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de derecho internacional de Núremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949.

b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de Derecho Internacional de Núremberg y confirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio.”

A continuación, el artículo 2º de este instrumento declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del estado y a particulares, ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquiera sea el grado de desarrollo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, con posterioridad, en el año 1973, la misma Asamblea General aprobó la Resolución N°3.074 (XXVIII), de fecha 3 de diciembre de 1973, “Principios de cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, en la que señala lo siguiente:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

“Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.”

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en este sentido, se debe tener presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de ius cogens, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo), de modo tal que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos, resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales.

A mayor abundamiento, siendo nuestro país un Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra obligado a cumplir de buena fe las resoluciones de la Asamblea General.

DÉCIMO TERCERO: Que, además, tanto la Declaración Universal de derechos humanos –artículos 4 y 5– como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas –artículos 7 al 10–, ratificados por Chile e incorporados a su derecho interno, prohíben en la práctica los crímenes contra la humanidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con la supremacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno, es preciso hacer constar que la modificación al antes citado artículo 5° de la Constitución Política de la República tuvo por objeto precisamente reforzar la protección de los derechos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

humanos, al disponer como deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos.

DÉCIMO QUINTO: Que cabe reiterar que la presente acción es de carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el ámbito penal como en el civil.

De seguir la tesis de la demandada, esto es, aplicar a este caso la prescripción del derecho privado, implicaría permitir que el Estado evitara cumplir su deber y se negaran derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, por quien, como se señaló precedentemente, es el constitucionalmente obligado a resguardarlos, lo que lleva a rechazar la excepción de prescripción.

DÉCIMO SEXTO: Que, establecido lo anterior y rechazada la excepción de prescripción, habrá de emitirse pronunciamiento respecto de los perjuicios demandados, los cuales hace consistir en daño moral, el que se avalúa en la suma total de \$300.000.000.-.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al daño moral demandado, ha de señalarse que, a pesar de su naturaleza particular, debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, y, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Así, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWYYL

Por otra parte, el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, como algunos autores lo sostienen, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral, el demandante se valió de prueba documental, acompañando una serie de documentos consistentes en artículos e informes a los cuales se les restará mérito probatorio, atendido que se trata de instrumentos que nada dicen relación con su situación particular, sino que se refieren de manera general a las consecuencias que presentan las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Que atendido que el demandante figura en la nómina de personas reconocidas como víctima de prisión política y tortura, y teniendo en especial consideración la gravedad del hecho ilícito del que fue víctima, sin que se rindiera otra prueba en orden a determinar con mayor precisión la evaluación del daño moral alegado, será regulado prudencialmente en la suma de \$15.000.000.-

Que en cuanto a la alegación de la parte demandada, en orden a estimar que para la regulación del daño moral se consideren los pagos recibidos por las leyes de reparación, será desestimado, por cuanto corresponden a asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Comisión Valech a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos, más no una indemnización de daño moral sufrido por las mismas, pues no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata.

DÉCIMO NOVENO: Que, en lo referente a la reajustabilidad de la indemnización por daño moral, ésta se reajustará de conformidad a la variación que experimente el I.P.C desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo, por cuanto el daño moral es evaluado por el juez en la sentencia, de ahí que las perniciosas consecuencias de la desvalorización monetarias sólo pueden empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el daño en comento.

VIGÉSIMO: Que, respecto de los intereses, las sumas contempladas en lo resolutivo del fallo devengarán el interés corriente desde la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada y hasta la época de su pago efectivo.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes 1437, 1698 y 1702 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, Constitución Política de la República, Convención Americana de Derechos Humanos, Convenio de Ginebra de 1949 y Ley 19.992, se declara:

I.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de daño moral, la suma de \$15.000.000, más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 19° y 20° del presente fallo.

II.- Que cada parte soportará sus costas, por no haber resultado totalmente vencido el demandado.

Regístrese y notifíquese.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL

Pronunciada por María Soledad Jorquera Binner, juez titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinticinco**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPPMXSWWYYL